

Pierre-Charles, Gérard. **Crisis del Estado e intervención internacional en Haití.** En: *Revista Tareas*, Nro. 118, *septiembre-diciembre*. CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos, Justo Arosemena, Panamá, R. de Panamá. 2004. pp. 65-78.

Disponible en la World Wide Web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/tar118/pierre.rf>



CLACSO
www.clacso.org

RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, DE LA RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO

<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>
biblioteca@clacso.edu.ar

NUESTRA AMERICA

CRISIS DEL ESTADO E INTERVENCION INTERNACIONAL EN HAITI

Gérard Pierre-Charles*

*Sociólogo haitiano, director de CRESFED, Puerto Príncipe, Haití.

El 29 de febrero 2004, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respondiendo a una solicitud formulada por el presidente Boniface Alexandre recientemente instalado en lugar de Jean Bertrand Aristide, dimisionario, autorizó, por la resolución 1559, el envío a Haití de una fuerza interinaria multinacional.

Por esta misma resolución, el Consejo dispuso el reemplazo, a partir del 1 de junio de 2004, de esta fuerza por una “misión internacional de estabilización” cuyo mandato y duración serían definidos posteriormente en un plazo de 60 días.

Esta resolución recibió el acuerdo unánime de los miembros del Consejo reunidos bajo la presidencia de la República Popular China que, de manera inusitada, dio su apoyo en el seno Consejo de Seguridad a una intervención directa de tropas extranjeras en un Estado miembro.

Esta resolución referida a Haití cobraba así un carácter especial, ya que no correspondía a una situación clásica susceptible de provocar tal acción. Sin embargo, había sido precedida por un despliegue publicitario sin precedente en que la televisión del mundo entero, mostraba imágenes poco usuales de violencia represiva y de acciones armadas, particularmente en Gonaïves, que hacían temer la guerra civil o un verdadero genocidio.

Se realizaba también en un marco de crisis política de larga duración y de una situación donde por segunda vez en diez años, la ONU debía intervenir no para conducir a la paz -ya que no se trata de una situación de guerra- sino para garantizar la seguridad y las condiciones de funcionamiento democrático en un Estado miembro.

Tratándose de un país de América Latina y, además, de una vieja República independiente las causas profundas de esta intervención llamaron la atención de analistas y observadores. Más aún, teniendo en cuenta que este *dossier* le correspondía a la OEA que tenía como mandato, desde la Cumbre de las Américas en Québec, en 2001, dar seguimiento a la contienda entre la oposición política y el gobierno de Haití. Sobre todo cuando Haití, durante este año trágico, celebraba sus 200 años como nación independiente.

Crisis del Estado

La decisión adoptada por el organismo internacional parecía corresponder al reconocimiento del “derecho de injerencia” preconizado, desde hace años, por algunos Estados como apropiado para enfrentar situaciones excepcionales de crisis y de incapacidad por parte del Estado de asumir el poder o de enfrentar un conflicto agudo.

Correspondía a lo que parecía ser una situación susceptible de desembocar en el caos o en una virtual guerra civil. Las imágenes de varios grupos armados, ampliamente difundidas a escala internacional, llevaban a los reporteros a precipitarse hacia Haití para “contemplar” las escenas de “la Armada caníbal” y otros espectáculos de sangre.

En el plano diplomático, la ONU había sido suficientemente informada de los antecedentes de este verdadero colapso como para no sentirse involucrada. En efecto, en 1994, había intervenido en Haití para suplantar a las fuerzas de EEUU de alrededor de 20 mil hombres que habían desembarcado en el marco de la misión de “restauración de la democracia” patrocinada directamente por el presidente William Jefferson Clinton. Las tropas se quedaron alrededor de 2 años y, desde la crisis electoral del año 2000 -consecuencia de las elecciones fraudulentas que instalaron una legislatura y a Aristide mismo en el poder- la OEA y, más recientemente, la CARICOM han sido parte integrante de las negociaciones y otras intervenciones tendientes a normalizar el panorama político. Estas instituciones y otras mantenían al secretariado general ampliamente informado de las violaciones de los derechos humanos por el régimen de Puerto Príncipe, de las dificultades en la búsqueda de un compromiso entre el poder y la oposición y del deterioro de la situación en términos de gobernabilidad, del respeto de las reglas del Estado de derecho y de la agravación de las condiciones de vida económica y social de la población.

Así, la degradación acelerada del clima político, a fines del año 2003, las manifestaciones populares masivas y la irrupción en la escena de ciertos grupos armados, favorecieron la argumentación de algunos Estados miembros, particularmente Francia, en pro de la eventual participación de la ONU en una misión humanitaria o de mantenimiento de la paz en Haití. En efecto, la violencia desatada por los *chimères*, hombres de mano y los mafiosos al servicio de Aristide, ponía a la orden del día la cuestión del “derecho de injerencia”. Los asesinatos y exacciones de toda suerte, en un entorno de aumento de la miseria, se referían al concepto de “población en peligro” para incitar a la acción internacional. Tal decisión emanaba de la sistemática destrucción de las instituciones que alcanzó su expresión más significativa con el desmembramiento de la policía nacional totalmente avasallada o desmoralizada. El Estado se mostró incapaz de asumir las responsabilidades y exigencias del orden democrático.

El Consejo de Seguridad de la ONU podía referirse a la amenaza que implicaba tal situación para la vida y los bienes, y el peligro que representaba Haití para la “seguridad de la región”. Sobre todo que un clima de fin de reino nacía de la combinación de eventos importantes: la creciente movilización de la población (partidos políticos, sociedad civil, estudiantes, etc.) reclamando la salida de Aristide, la presencia inopinada de grupos armados en el norte del país y la región colindante con la República Dominicana, las críticas acerbas de la prensa y el cuestionamiento de la legitimidad misma del gobierno por ciertas instancias internacionales. La población, en un clima excepcionalmente tenso y frente a las amenazas y peligros creados por las condiciones mismas de la caída de este bárbaro régimen que puso en marcha un plan de represalias, tuvo que asistir, entre desahogo, humillaciones e indignaciones, a la llegada de las tropas extranjeras venidas a restablecer el orden.

Tal escenario no era de ninguna manera una innovación. En efecto, en 1915, en un contexto local de violencia y de caos, la infantería de Marina (*marines*) de EEUU desembarcó en Puerto Príncipe y el saldo de esta intervención fue de 19 años de ocupación. Se trataba de “restablecer el orden democrático” en Haití. Esto, en un contexto regional de expansionismo y de injerencia. Cincuenta años después, en 1965, en un contexto regional de democratización generalizada y en un marco local marcado por un régimen de fuerza instaurado por los militares, de las tropas de EEUU, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, habían intervenido con el objetivo de “restaurar la democracia”.

Diez años más tarde, el intervencionismo toma la forma de una acción Internacional contra el Estado mafioso, generador de terrorismo y de anarquía, que amenazaba con realizar un baño de sangre sobre una población pacífica.

En esta continuidad, se proyecta como factor permanente la vigilancia de la gran potencia siempre atenta y lista a corregir cualquier desorden en su vecindario. En esta ocasión, sin embargo, tal preocupación era compartida con Francia que, más allá de

cualquier actitud competitiva, manifestaba una clara coincidencia de intereses. En el fondo, tal coincidencia parecía corresponder a un imperativo de la globalización. Haití, debido a su retraso económico y social así como al arcaísmo de su sistema político, constituía una suerte de “disidencia histórica y geográfica” insoportable. Según la lógica de esta globalización, se deberían movilizar recursos adecuados para incorporarlo a la normalización de los mercados, de la fuerza de trabajo, de los modos de vida y de los valores contemporáneos.

Tal continuidad se refiere en definitiva a la crisis del Estado haitiano que, durante este último siglo, no ha podido lograr la adecuación de su estructura, su funcionamiento, sus métodos y sus resultados, a las exigencias del mundo moderno. En el terreno político, económico, social y cultural el Estado haitiano parece prolongar, hasta el día de hoy, el siglo XIX latinoamericano marcado por la autocracia, el régimen fuerte a ultranza que cierra los ojos a las exigencias de las mayorías, en términos de democracia, de justicia, de progreso y de desarrollo. Este Estado, expresión de una oligarquía precaria (de militares, de hombres de negocios o de políticos), no lograba -a pesar de las influencias de modernismo proveniente del extranjero bajo la forma de capital o de modelo- dirigir la sociedad, ni estimular a las fuerzas motrices susceptibles de asegurar su avance.

Sin legitimidad, sin representación real de los productores o de los trabajadores, sin credibilidad entre los ciudadanos, el Estado se mantiene débil en su función de organización de la sociedad y fuerte en tanto que opresor, funcionando sobre una base de extorsiones y de violencia.

Este déficit del Estado, de manera repetitiva, provoca pulsaciones en medio de las categorías sociales más avanzadas de una oposición ilustrada, pero sin llegar a revertir el vapor y a generar una dirección política que pueda impulsar la democracia, el desarrollo y el progreso. De ahí, un bloqueo continuo, una suerte de empate, de empantanamiento interminable, una transición que no acaba. Tal crisis de dirección, o mejor dicho esta crisis de hegemonía, no pudiendo ser resuelta en términos de desenlace violento, de relación de fuerzas o de compromiso conduce a unos y otros a la tentación de buscar el apoyo de fuerzas extranjeras para rebasar el equilibrio y lograr revertir la situación que la dinámica de las fuerzas locales no permite resolver.

Gradual cuestionamiento del poder personal

Jean Bertrand Aristide surgió en la escena política en 1990 como líder de gran popularidad, sobre todo en los medios de los desposeídos. La revancha de los sectores conservadores haitianos tomó la forma de un golpe de Estado.

Democráticamente electo, fue alejado del Palacio durante tres años durante los cuales vivió en Washington, preparando su regreso, realizado bajo el auspicio de EEUU y de la ONU.

Diez años después, en 2004, su popularidad y los cambios que anunciaba, se han evaporado. Pero, por otro lado, supo utilizar todos los atributos de la democracia para instaurar un poder antidemocrático basado en el asesinato político, la corrupción, el narcotráfico, la utilización de viejos métodos de mentira, de violencia, de simulación y de intimidación.

Tal realidad se le fue imponiendo cada vez más al pueblo, especialmente, a partir de las elecciones del año 2000. Organizadas de manera ilegal, suscitaron una crisis postelectoral sin fin. Esta, después de más de tres años de cuestionamiento, de resistencia y de combate democrático, conllevó en última instancia, al derrocamiento de Jean Bertrand Aristide.

De hecho, regresando del exilio con un apoyo amplio de la población y el sostén ilimitado de la comunidad internacional, el ex-cura de St-Jean Bosco puso en evidencia su impotencia para hacer un buen uso de los inmensos recursos de que podía disponer. En efecto, la comunidad internacional había aportado una suma de alrededor de 2 mil millones de dólares, en calidad de préstamos y donaciones. Este monto esperaba nada más que los proyectos apropiados para ser puesto a disposición del gobierno y de la población desposeída de este país. La mala gestión comprometió esta posibilidad de relanzar la economía y de garantizar el éxito de un proyecto que había suscitado tanta esperanza en los medios populares. Al mismo tiempo, en el plano político, el régimen, en vez de abrirse y de atraer a otras categorías sociales,

retomó su línea de conducta demagógica y populista recurriendo más y más a la fuerza.

La continuidad de este poder había sido asumida por René Préval, quien le sucedió, jugando plenamente el papel de marioneta. Cumpliendo al pie de la letra los designios de su tutor, continuó la política de violación de los derechos humanos, de nepotismo y todo un juego maquiavélico destinado a garantizarle el regreso.

El rechazo de la ciudadanía frente a este reino anarco-populista, comenzó a manifestarse en este período (1995-2000). Provenía de la "Organisation du Peuple en Lutte" (OPL), representando la rama mejor organizada del movimiento que había apoyado a Aristide. Su representación parlamentaria, con mayoría relativa en la Cámara de Diputados (35 de 83) y en el Senado (9 de 27), impuso al dúo presidencial Aristide/Préval, un primer ministro de la oposición, Rosny Smarth. Este tuvo todas las penas del mundo para funcionar en el marco previsto por la Constitución, viéndose constantemente hostigado por las jugadas del Ejecutivo presidencial y de las "organizaciones populares" manipuladas en los pasillos del Palacio.

El Parlamento emprendió la tarea de frenar las violaciones del orden republicano y otras derivaciones propias del poder absoluto y populista por el cual comenzaba a funcionar el presidencialismo respaldando la impunidad y los abusos permanentes en contra de los ciudadanos.

Ya a este nivel, las exigencias de la OPL en favor de la institucionalización, la modernidad, el respeto de la ley y de la Constitución configuraban todo un polo de atracción para el conjunto de la población. La capacidad de convocatoria, de movilización y la credibilidad misma del poder se derrumbaba. La propaganda gubernamental se esforzó entonces por atribuir las acciones de la oposición a influencias provenientes del antiguo régimen duvalierista o de sectores del extranjero.

En abril 1997, abortó una tentativa del presidente Préval de imponer su voluntad durante las elecciones parciales para el Senado, porque la oposición tenía todas las posibilidades de reforzar su mayoría. Las denuncias de la OPL contra este comportamiento antidemocrático surtieron efecto; exigiendo el respeto de las reglas del juego, alimentaron un vasto movimiento reivindicativo de los sectores populares, cada vez más desconfiados y crítico frente a las promesas no cumplidas por el poder. Estos sectores, sin embargo, frenados, intimidados, confundidos por los métodos del populismo, tardaban en expresar en acciones autónomas o de apoyo a una oposición entonces perseguida y calumniada.

A pesar de todo, la tenacidad de esta oposición, la dimisión del primer ministro Smarth y la imposibilidad técnica y política de remplazarlo, suscitaron apoyo en todo el país así como a las acciones de los parlamentarios y otros sectores de la prensa y de instituciones cívicas en favor del respeto del Estado de derecho. Tal situación llevó al presidente Préval a disolver el Parlamento en diciembre 1998, demostrando así la incapacidad de su régimen de poder personal de coexistir con un parlamento independiente. Mostró, asimismo, su negación a aplicar de hecho los preceptos constitucionales, previendo el funcionamiento de un Ejecutivo bicéfalo conforme a las necesidades del pluralismo.

Laboriosa emergencia de una alternativa

En el año 2000, parece aún más evidente la imposibilidad del Estado, corroído por todos los vicios, de garantizar la gestión del país y de cohabitar, al mismo tiempo, con una oposición democrática. Esta incompatibilidad se hizo notoria, en ocasión de la convocatoria y la realización de las elecciones legislativas y presidenciales. En efecto, el conflicto post-electoral a que condujo, expresión de una crisis política y social mucho más profunda, traducía el arcaísmo de las estructuras y de las instituciones, así como la naturaleza de las dificultades inherentes al no-desarrollo. Se profundizó a medida que se expresaba la voluntad enfermiza del Ejecutivo de imponer a la nación las alcaldías, el parlamento, un presidente, en fin, de monopolizar el Estado al servicio de un solo hombre.

Los partidos de oposición, que tenían todas las posibilidades de ganar las elecciones legislativas, fueron despojados de todos sus puestos ganados, extorsión que se extendió al poder judicial y a las diversas instituciones del Estado, incluyendo a la Policía. El ambiente de represión que acompañaba las acciones de fuerza contra toda

oposición, también favoreció la determinación y la acción unitaria de los partidos políticos de diversas tendencias (social-demócrata, democrático-popular, cristianos comprometidos, conservador moderado), llevándolos a reunirse en el seno de la Convergencia Democrática. Esta coalición patriótica, cuestionando la legitimidad del gobierno y denunciando sus fechorías, minó su credibilidad en el seno de la población, estimulando la resistencia ciudadana.

La comunidad internacional, por su lado, particularmente la OEA, dando seguimiento a las protestas ciudadanas, tuvo que promover negociaciones entre las dos partes. Negociaciones laboriosas, durante las cuales el secretario general y el secretario general-adjunto organizaron más de una veintena de visitas a Haití. En el transcurso de esta misión, el Consejo de la OEA y la Asamblea General de la institución emitieron importantes resoluciones que fueron suscritas por el gobierno haitiano, pero que quedó como letra muerta debido a la voluntad del mandatario de imponer sus puntos de vista y de descartar todo compromiso.

La dinámica de contestación y de negociación, impulsada por la convergencia, condujo gradualmente a la toma de conciencia y a la acción militante de diversos sectores de la sociedad civil. Estudiantes, periodistas, organizaciones de derechos humanos, iglesias, asociaciones de mujeres y sector empresarial se levantaron a reclamar el respeto de los derechos humanos y de los compromisos contraídos por el Estado haitiano. Así, la oposición se consolidó a pesar de la voluntad de las autoridades de ahogar toda crítica, de manipular a las masas y de amordazar a la prensa. La ciudadanía comenzó a sentirse comprometida y se mostró cada vez más consciente de la naturaleza de este poder y del hecho de que utilizaba, además de los mecanismos y recursos públicos, los peores instrumentos de la autocracia así como de potentes redes internacionales ligadas a su participación en el tráfico de drogas.

El Estado mafioso, al presentarse en nombre del pueblo y de la causa popular, se había convertido en un instrumento eficaz a partir del no derecho, del enriquecimiento ilícito, de la impunidad, de la simulación, de sus objetivos bajo un velo populista y constitucionalista. Se había dotado de un poder criminal enorme, cada día más distante de la sociedad y opuesto al progreso y a la libertad. De ahí que la dicotomía entre ese Estado y la nación se tornaba cada vez más peligrosa. De esta manera, el aparato estatal al servicio de Aristide, de los barones de la droga, de los aprovechadores del régimen y de sus aliados haitianos y extranjeros, demostraba que no existía más que un objetivo: garantizar la impunidad, mantener su dominación y perennizarse en el poder.

Frente a esta realidad, la nación, en un proceso difícil de toma de conciencia, de refundación, de replanteamiento de su organización social, comenzaba a definir su proyecto de construcción de las bases materiales correspondientes a su necesidad de desarrollo y de democracia.

El año 2003 fue el de la ampliación y del crecimiento de los sectores progresistas. La Convergencia Democrática, que reunía a las fuerzas políticas de la oposición, imprimió una orientación unitaria a todos los que obraban a favor del cambio. Constituía, al mismo tiempo, la parte contraria del gobierno en las negociaciones con la comunidad internacional en vista de lograr un compromiso para una salida de la crisis.

La acción de la convergencia fue reforzada y renovada por ciudadanos venidos de la sociedad civil: miles de socios de las cooperativas de ahorro, despojados de sus ahorros por timadores oficiales; los estudiantes que reclaman la autonomía de la universidad y el derecho de manifestarse; las iglesias asociadas a las reivindicaciones de la población y, en general, todos los sectores reclamando la buena gobernabilidad y el fin de la corrupción.

La sociedad civil organizada, bajo el nombre de “grupo de los 184”, emprendió una campaña de participación cívica donde se encontraron los elementos más dinámicos de las instituciones privadas, de los reagrupamientos de universitarios, de las asociaciones de mujeres, de las organizaciones de defensa de derechos humanos, etc. La movilización de estos sectores conllevó al conjunto de la población a manifestarse contra el régimen, con el efecto de exasperar la barbarie de los órganos represivos contra estos activistas y, particularmente, contra los estudiantes universitarios.

Desde entonces, el movimiento cívico, reagrupando a la sociedad civil y grupos políticos, alcanzó un mayor impulso, dando lugar a manifestaciones en la calle que reunían a más de 100 mil personas. Las bases de consenso social se habían encontrado para combatir la dictadura. El esquema y el contenido de la transición a un régimen democrático y de garantía de los derechos humanos se afirmaba y, con este vasto

movimiento de la sociedad, se desdibujaban las líneas de un proyecto alternativo de carácter republicano que pudiera conducir a la realización de las elecciones.

A principios de 2004, año de celebración de los 200 años de nuestra independencia, tal movilización y el espíritu combativo de la población aparecieron claramente como la expresión de un cambio en proceso. Provocaron el derrumbe del mito de la popularidad absoluta de Aristide, demostrando también la débil capacidad de convocatoria del líder y del partido oficial. Estos fenómenos políticos llevaron a la ruptura de toda la lógica de funcionamiento del sistema basado en la represión, la intimidación, la manipulación y el inmovilismo de los ciudadanos. Estos, desde entonces, desafiaban la brutalidad de los policías y otros agentes represivos. Las instituciones del Estado no podían seguir funcionando, llevando a la parálisis el aparato de opresión. El pueblo reclamaba la salida de Aristide y esta reivindicación pacífica generalizada exasperaba la violencia de la máquina represiva. Toda esta lucha provocaba la desarticulación del sistema.

Era un escenario de derrumbamiento y de implosión de un poder que parecía total y todopoderoso. Favoreció, por lo tanto, la entrada en escena de ciertos sectores armados provenientes de grupos paramilitares al servicio de Aristide en disidencia, sobretodo en la ciudad de Gonaïves, sea de elementos del antiguo ejército deshecho en 1995 y refugiados en República Dominicana que penetraron por la frontera norte.

En el plano internacional, la lucha unitaria de la oposición pacífica y de la sociedad civil, particularmente del “grupo de los 184” provocó la ruptura del sistema de alianzas subordinadas de Aristide con la comunidad internacional. Hasta esta etapa de la resistencia del pueblo y de la violencia represiva, ilimitada y criminal, la mayor parte de los países amigos de Haití así como la OEA y la CARICOM continuaban apoyando al gobierno, testimoniándole su complacencia y hasta su complicidad. Se referían a su “legitimidad” mientras reclamaban el enderezamiento de ciertas prácticas políticas ilegales y el cese de las violaciones de los derechos humanos.

Con la explosión inesperada del movimiento popular y la concertación de tantos sectores sociales reclamando la salida de Aristide, la comunidad internacional debió cambiar de hombro su fusil. Por primera vez, durante la segunda quincena de febrero, personajes importantes de esta comunidad mencionaron la incapacidad del jefe de Estado de garantizar la seguridad de las vidas y de los bienes en Haití y también de garantizar la seguridad en la región del Caribe. En función de este ambiente, una compañía privada de seguridad de EEUU, la Steele Foundation -que procuraba, desde hacía aproximadamente dos años, la seguridad de Jean Bertrand Aristide- al no tener las garantías apropiadas de las autoridades de Washington, decidió de poner fin a la delicada misión de sus agentes colocadas en el Palacio Nacional.

La intervención extranjera

Los días 1 y 2 de enero de 2004, tomaron todo un significado simbólico en el proceso de constitución del consenso histórico de la Nación en la búsqueda de la libertad y de una auto definición conforme a sus aspiraciones, a la dignidad humana y del desarrollo económico y social. En esta circunstancia, el pueblo haitiano aferrado, como lo sabemos -y hasta qué punto- a los valores de la nacionalidad y a una independencia conquistada en condiciones tan heroicas, en vez de celebrar este aniversario, invadió las calles de la capital y de las provincias para decir no a la dictadura y reclamar la salida del dictador cuya conducta deshonraba a la Nación. La policía y los grupos paramilitares reprimieron a los manifestantes con una violencia sin igual, dejando un saldo de varios muertos y heridos.

En esta ocasión, la Plataforma Democrática -coalición política donde se reagruparon las categorías sociales y políticas más diversas, desde los estudiantes, las asociaciones patronales, los sindicatos, las organizaciones campesinas, reuniendo en una palabra a la oposición política y a la sociedad civil- entregó un documento reclamando la salida de Aristide, al único invitado oficial de alto rango presente en las celebraciones, el presidente de Africa del Sur, Tabo Mbeki.

El 20 de febrero de 2004, este documento sirvió de base a la posición de la Plataforma Democrática para reiterar las proposiciones de la Nación frente a las proposiciones que le eran transmitidas por una delegación internacional de alto rango, compuesta entre otros por el subsecretario de Estado norteamericano Roger Noriega, el ministro canadiense de la francofonía, Denis Coder, el ministro de relaciones exteriores de Bahamas, de altos funcionarios de la OEA, de la CARICOM y de la Unión Europea. A través de esta delegación, la comunidad internacional renovaba su apoyo a Aristide, jefe de un Estado mafioso, para que se mantuviera en el poder hasta terminar su “mandato” el 7 de febrero de 2006, invitando a la oposición a suscribir un compromiso que incluía, entre otros, la designación de un primer ministro de consenso. Lo que la oposición rechazó.

A fin de cuentas, confrontados a la firmeza de la oposición y al desmoronamiento del sistema, los socios internacionales debieron reaccionar en el sentido del movimiento general de la sociedad. Aristide fue obligado por la fuerza de las cosas a dejar el poder, evidenciando su derrota política frente al rechazo del pueblo.

El documento de la Plataforma Democrática reapareció, despojado de ciertos elementos mayores de su contenido. Sirvió de referencia a la nueva institucionalidad precaria y formal, sobre la cual la OEA y la embajada de EEUU se basaban, después de la salida de Aristide, para reconocer como presidente provisional, según la Constitución, al presidente de la Corte Suprema, el juez Boniface Alexandre y para la colocación de un Consejo de Sabios, de 7 miembros, quienes debían contribuir a la designación de un primer ministro de consenso y de su gobierno.

De hecho, Haití entraba en otra etapa de su historia. Sin embargo, el impulso de renovación democrática que quería imprimir el consenso histórico del 1 y 2 enero de 2004 a la difícil lucha del pueblo para librarse del despotismo, fue nuevamente desviado o truncado.

Mientras tanto, había desembarcado en el país una fuerza militar multinacional que Aristide había solicitado a las Naciones Unidas y en declaraciones públicas, expresando así su miedo de ser arrasado por la ola de fondo de la protesta generalizada así como su obsesión de quedarse en el Palacio bajo cualquier circunstancia. Esta solicitud oficial fue reiterada por el presidente Boniface Alexandre. Así, mediante esta intervención, se dio un cortocircuito en el proceso inusitado hacia el consenso y la determinación histórica, que había emprendido la Nación haitiana para promover, con la unidad de los diversos sectores progresistas, una verdadera liberación.